

# **Acciones para la inserción del movimiento revolucionario salvadoreño**

*Ana Guadalupe Martínez*

## **Introducción**

Para tratar el papel de la diplomacia mexicana en el proceso de negociación de los Acuerdos de Chapultepec (1989-1992) durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, es preciso referirse asimismo a los sexenios de José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid (1982-1988), al igual que a la consistente política exterior de estos gobiernos hacia Centroamérica, que consideraron siempre que la base de esta conflictividad en la región estaba en los graves problemas económicos y sociales, las violaciones a los derechos humanos y la exclusión política de una parte importante de esas sociedades. Fue en el primer año de gobierno de López Portillo cuando se produjo la agudización de los conflictos locales en Nicaragua y El Salvador.

Es importante recalcar el papel que en la primera mitad de 1979 desempeñaron los gobiernos de México, Venezuela y Panamá, encabezados respectivamente por sus presidentes José López Portillo, Carlos Andrés Pérez y el general Omar Torrijos, en la salida del general Anastasio Somoza de Nicaragua. México incluso retiró a su embajador, con lo que comenzó un proceso de aislamiento internacional al gobierno de Somoza.

En ese momento, la política exterior estadounidense del presidente James Carter demandaba el respeto a los derechos humanos como una condición de cualquier gobierno amigo que se preciara de ser democrático, lo que posibilitaba un papel activo a México y otros gobiernos en la transición nicaragüense.

México, Venezuela y Panamá fueron los interlocutores del grupo de 12 personalidades democráticas de Nicaragua que representaban las distintas corrientes y sectores de la lucha antisomocista, incluido el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), con el fin de que éste fuese lo más cauteloso posible en la propuesta que sustituiría al ex dictador Somoza; proceso que finalmente tuvo por aceptación que fuese el Grupo de los Doce el que asumiera la organización de la transición a un gobierno democrático en Nicaragua a finales de los años setenta, contando con el fuerte apoyo de esos tres gobiernos que, en cierta medida, garantizaban la preservación de los valores democráticos y de no alineamiento con Cuba y la Unión Soviética, preocupación legítima del gobierno de Carter, quien buscaba la reelección a la Casa Blanca.

Estos acontecimientos abrieron el espacio para que el FSLN, sin llegar a ser una voluminosa e importante fuerza guerrillera, pudiera aprovechar de manera hábil e inteligente el aislamiento político interno e internacional de la dictadura somocista y la huida de la Guardia Nacional somocista, que rápidamente creó un vacío de autoridad en las principales ciudades, incluyendo la capital, Managua. El impacto que produjeron los acontecimientos de esos días en los revolucionarios salvadoreños y la participación de los gobiernos de México, Venezuela y Panamá para aminorar las desconfianzas de Estados Unidos a lo que sucedía en Nicaragua fueron enormes, y el interés por parte del movimiento popular y revolucionario salvadoreño por abrir relaciones con el gobierno mexicano se profundizó.

Tres años después, el grupo de países encabezados por México, Venezuela y Panamá, al que se agregó Colombia, formarían el Grupo de Contadora, que le daría continuidad a la transición en Nicaragua, mediante la búsqueda del diálogo entre las partes en conflicto, su oposición a la injerencia extranjera y su planteamiento de no enmarcar los problemas regionales en la confrontación Este-Oeste. Asimismo, este grupo mostró interés en tener más presencia e influencia en las instituciones, la política y el debate académico de los procesos de construcción democrática y de los conflictos armados que se estaban produciendo en Centroamérica, y de enfrentar de manera conjunta la presión y la agresividad de la nueva administración estadounidense, encabezada por el presidente Ronald Reagan.

El movimiento popular salvadoreño y los distintos grupos guerrilleros —aún no se habían unificado con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)— comenzaron a ver y a considerar a esos actores internacionales como posibles aliados en la búsqueda de la democratización de El Salvador.

## **Antecedentes**

Los limitados espacios internacionales de los revolucionarios salvadoreños en los años sesenta y setenta eran, para algunos, solamente Cuba y la Unión Soviética, y estaban fundamentalmente vinculados al Partido Comunista, sobre todo a nivel sindical y del movimiento estudiantil universitario, incluidas las centrales obreras socialistas e internacionales estudiantiles. Los miembros de dicho partido asistían a los eventos que se desarrollaban en el campo socialista, en los que se establecían vínculos en México con el Partido Comunista Mexicano y sus correspondientes centrales obreras, y con el movimiento estu-

diantil de ese país; todo esto para poder decir que, para muchos dirigentes locales salvadoreños tanto del movimiento social como de los guerrilleros, el gobierno de México no era precisamente confiable o considerado como un amigo, pues el cristal a través del cual se le miraba era precisamente el radical y socialista.

Cuando el gobierno de México abrió sus fronteras, se convirtió en retaguardia política y asumió en los distintos foros internacionales posiciones en defensa de los derechos humanos, la libre determinación de los pueblos y el derecho a tener gobiernos democráticos, por su parte, los salvadoreños en lucha compartieron esa posición, además de que les entusiasmaba la idea de la relación política con el gobierno mexicano.

México fue decisivo para el movimiento popular y revolucionario en tres aspectos fundamentales: en ser una retaguardia política; en la construcción del escudo contra la intervención estadounidense en Centroamérica, y en la democratización del pensamiento de la dirigencia revolucionaria salvadoreña y en el diseño de los contenidos para una negociación.

### *Retaguardia política*

Generar la confianza, la certeza de estar en el mismo bando de búsqueda genuina de la democratización de El Salvador y de la defensa de la no intervención de Estados Unidos en Centroamérica fue un proceso con base en las vivencias personales de la mayoría de los dirigentes guerrilleros que por necesidad de su movilización a otros países para realizar tareas políticas tuvieron que visitar México. El asilo otorgado a familiares de muchos de estos guerrilleros, así como a familiares de dirigentes sociales, sindicales; la calidad de la relación política con las instituciones mexicanas, sobre todo con la Cancillería; la relación con la Embajada de México en El Salvador; la labor humanitaria que esta embajada realizaba; la relación que se produjo

en organismos internacionales, en particular en aquéllos del sistema de las Naciones Unidas como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, crearon una superficie de contactos muy amplia que permitió a los revolucionarios salvadoreños llegar a la conclusión de que México era un aliado genuino en la lucha por la democratización y la defensa de una política de no intervención de Estados Unidos en Centroamérica. Ejemplo de esto fue la postura de México en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia (1979), en la que una delegación de la comisión salvadoreña de derechos humanos no gubernamental, encabezada por Marianela García Villas, solicitó ser escuchada para denunciar la gravedad de lo que ocurría en El Salvador respecto a los derechos humanos. Asimismo, en las comisiones especiales de las Naciones Unidas de las cuales era miembro, México permitía sugerir contenidos de cara a mantener en duda avances en temas cruciales como el respeto a los derechos humanos y la necesidad de democratizar el país. Todos estos hechos generaron la confianza en que México era un país amigo.

Sin embargo, ¿si para la mayoría de los guerrilleros y sus dirigencias, los países socialistas y los países del Tercer Mundo y los no alineados eran los amigos y los aliados tácticos?, ¿dónde se ubicaba México?

México fue clave en el proceso para convertir a los dirigentes de un movimiento guerrillero muy ortodoxo, en dirigentes de un movimiento insurgente con una visión más amplia y abierta.

¿Qué fue lo que sucedió para que se produjese esa transformación? La combinación de la sabiduría de un dirigente socialdemócrata salvadoreño, Guillermo Manuel Ungo, y la decisión del gobierno mexicano de dejar actuar en su territorio a la parte política y popular del movimiento salvadoreño bajo determinadas reglas:

1. El Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el FMLN instalaron una oficina en la capital mexicana en la que se encontraba la Comisión Política Diplomática de esta alianza democrática revolucionaria, que fue considerada la representación diplomática del FDR-FMLN casi con características de una embajada.

2. Se estableció un espacio con los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, de agencias de prensa y otros, que permitió mantener niveles de información excelentes y ágiles para romper la barrera de desinformación que el gobierno salvadoreño, con apoyo del gobierno estadounidense, mantenía acerca de los acontecimientos que se registraban en El Salvador, desde temas de derechos humanos hasta la situación militar durante el enfrentamiento armado.

3. Se amplió la relación con los distintos grupos de solidaridad tanto del movimiento social y político (sindicatos, grupos locales de bases del Partido Revolucionario Institucional, grupos religiosos, comunales y estudiantiles, etcétera).

4. Se realizaron en territorio mexicano reuniones de trabajo político o de coordinación del movimiento popular salvadoreño.

5. Fue posible conceder asilo o permitir la residencia a cuadros y dirigentes del movimiento social y revolucionario, y sus familias (en algunos casos). También se concedió la residencia a un importante grupo de profesionales, académicos e intelectuales salvadoreños que interactuaban con colegas mexicanos, ya sea en actividades laborales o en centros de investigación social, económica y política.

6. La flexibilidad en el paso de los salvadoreños en el éxodo hacia Estados Unidos. Todavía no está clara la cifra de cuántos salvadoreños se quedaron en territorio mexicano mimetizados en las comunidades de la periferia de las grandes ciudades mexicanas.

7. México fungió como puente para salir hacia otros países desde su capital ante la imposibilidad de cruzar el territorio o

el espacio aéreo de Estados Unidos. Ello facilitó la movilidad para la mayoría de los líderes de la guerrilla.

Si se revisan cuidadosamente todas las posibilidades de contacto que las condiciones arriba descritas generaron, se concluye entonces que la transformación por la vía de la discusión de las experiencias mismas y del conocimiento de la realidad mexicana y de otros países democráticos, sobre todo de Europa, posibilitada por el esfuerzo de México y por Ungo de abrir al mundo al movimiento popular y guerrillero de El Salvador, fue lo que influyó al final del camino en los contenidos de la negociación política.

Lo anterior tuvo lugar en medio de un feroz ataque, presiones y reclamo de los distintos gobiernos de Estados Unidos hacia México con el objetivo de reducir el espacio de acción del movimiento revolucionario salvadoreño, aislarlo y quitarle legitimidad a su lucha e interlocución con otros gobiernos a nivel mundial.

Fue clave la relación neutral del gobierno mexicano hacia Cuba, pues ello permitió que hubiera una constante comunicación diplomática con el gobierno de este país y con ello mantener una presencia muy activa en el movimiento de países no alineados y una apertura en las relaciones con la mayoría de naciones africanas que de otra manera habría sido imposible.

Cuando el secretario de Estado Alexander Haig, del recién establecido gobierno del presidente Reagan, declaró que “había que marcar la raya a los comunistas en El Salvador”, quedó claro que aquel gobierno que permitiera libertades a los revolucionarios salvadoreños en su territorio no era un gobierno amigo. Es en este contexto que la política exterior mexicana, pese a todas esas amenazas, actuaba en consonancia con la decisión de no permitir la intervención de Estados Unidos en Centroamérica.

La política exterior mexicana de esa época estuvo marcada por propuestas e iniciativas que requerían mucho diálogo

con los distintos gobiernos a nivel internacional, así como por una cancillería que estaba permanentemente informada de las actividades políticas internas, de las acciones militares más importantes de la estrategia político-militar de la insurgencia, y que recibía a sus dirigentes para obtener de primera mano los insumos para elaborar propuestas que incluían, con sensibilidad, el punto de vista de los luchadores salvadoreños por la democracia.

Las relaciones con la Cancillería y con otras secretarías de los gobiernos mexicanos de la época fueron trascendentes para concebir y construir una posición democrática sustentada en principios universalmente aceptables. Las reuniones de intercambio de propuestas para ser llevadas a organismos internacionales e instancias políticas diplomáticas bilaterales de México con otros gobiernos fueron construyendo un pensamiento propio, profundizando en las discusiones internas con los aliados democráticos del FDR, fundamentalmente con Ungo, quien tenía un alto nivel de representación en el concierto de países gobernados por la socialdemocracia. El mismo Ungo era vicepresidente para Centroamérica de la Internacional Socialista.

### *El escudo para detener la intervención estadounidense en Centroamérica*

La construcción de nuevas e innovadoras formas de hacer participar a la comunidad latinoamericana por medio del Grupo de Contadora fue fundamental, cuando la política del presidente Reagan consideraba incluso la posibilidad de una intervención militar directa y amenazaba con regionalizar el conflicto y hacer de Centroamérica el último escenario de la confrontación Este-Oeste. Además, no existía ningún mecanismo regional de diálogo independiente del alineamiento con Estados Unidos,



pues la OEA era caja de resonancia de la agresiva política de ese país hacia Nicaragua.

El Grupo de Contadora, grupo de países encabezados por México, se constituyó como una de las más importantes iniciativas político-diplomáticas que, junto con la Declaración Franco-Mexicana, le dio un respiro y el tiempo justo al FMLN para el reacomodo que necesitaba después de la ofensiva final de enero de 1981, la cual había fracasado en su intento por insurreccionar a los sectores urbanos de las principales ciudades del país.

Sin este tiempo ganado por la intensa actividad político-diplomática de cancilleres y jefes de Estado en visitas conjuntas a todos los países centroamericanos para evitar la intervención directa de tropas de Estados Unidos pese al contexto de escalada en apoyo militar a las fuerzas armadas salvadoreñas y a la creación de grupos irregulares armados conocido como la contra antisandinista, el ejército insurgente salvadoreño no hubiese podido resistir la represión y articularse en las zonas rurales donde ya había consolidado su retaguardia. De igual manera, el movimiento popular pudo replegarse hacia esos frentes de guerra como solución a los problemas de persecución en las ciudades.

Ha sido uno de los periodos más creativos de la diplomacia mexicana y a pesar del aparente agotamiento y la falta de resultado en la consecución de un diálogo entre gobiernos centroamericanos, ese tiempo fue valioso para el “otro bando”, ya que le permitió rearticularse e iniciar una estrategia de resistencia en medio de la más feroz represión y amenazas de intervención directa por parte de Estados Unidos.

Generar el ambiente para el creciente rechazo latinoamericano a la posible decisión de Estados Unidos de intervenir militarmente en Centroamérica y ganar el tiempo necesario para que los movimientos populares y revolucionarios lograran construir una correlación de fuerzas internas que los volviese acto-

res indispensables en las soluciones negociadas en sus propios países es un servicio impagable a México, a su política exterior, a sus calificados funcionarios, a su tradición de ser el hermano mayor de la región.

*Construyendo los contenidos de la negociación para el fin del conflicto armado*

En 1988 tuvo lugar la salida al exterior de la comandancia general del FMLN y de los encuentros con la comunidad socialdemócrata de presidentes de América Latina. Las visitas fueron previamente preparadas por una delegación de la comisión político-diplomática que, en consulta con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, preparó el listado de solicitudes de entrevistas con las cancillerías de varios países latinoamericanos gobernados por presidentes socialdemócratas y comprometidos con la búsqueda de una solución negociada a los conflictos centroamericanos, algunos de ellos amigos personales del doctor Ungo y participantes en el Grupo de Contadora, después de ampliarse a ocho miembros: los presidentes Óscar Arias de Costa Rica, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Rodrigo Borja de Ecuador, Alan García de Perú, Raúl Alfonsín de Argentina, César Gaviria de Colombia. En México, los recibiría el secretario Bernardo Sepúlveda.

Por esos días el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, había iniciado una política de acercamiento y de negociaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos para cortar el suministro y el apoyo a la contra nicaragüense. Esto planteó a la insurgencia salvadoreña la consideración de una estrategia político-militar para buscar una negociación con ventaja o una definición militar a su favor. Nicaragua estaría buscando legítimamente disminuir la tensión en sus relaciones con Estados Unidos y por supuesto la contrapartida sería la

suspensión del apoyo y el papel de retaguardia que jugaba para los revolucionarios salvadoreños el territorio nicaragüense.

Es en este contexto que se produce la gira latinoamericana de los dos miembros más representativos de la comandancia general del FMLN que sirvió para contar con nuevas ideas y profundizar en temas que se utilizarían para darle contenidos a la negociación.

El FMLN había acordado preparar una ofensiva general militar y convencer a los sandinistas de un último esfuerzo estratégico para mejorar las condiciones político-militares para enfrentar la negociación con el gobierno salvadoreño. En la visita a la Cancillería mexicana, se planteó al secretario Bernardo Sepúlveda con mucha franqueza la decisión de buscar mejores condiciones para negociar el fin del conflicto, incluyendo, por supuesto, un esfuerzo militar estratégico. El secretario Sepúlveda preguntó al final de la conversación con qué pensaban seducir al gobierno para que aceptara esa negociación. Esta pregunta obligó a una de las más profundas y necesarias discusiones acerca de los límites y concesiones que estaría dispuesto a ceder el FMLN en una solución negociada al conflicto.

En Colombia, después de que Joaquín Villalobos explicara lo que se necesitaba corregir para garantizar que las fuerzas armadas no fuesen las que determinaran la política en el país, durante la visita al presidente Gaviria uno de los asesores colombianos presente en la conversación sintetizó la explicación diciendo que “lo que se estaría buscando es que la institución que por ley tiene el monopolio del uso de las armas sea neutral frente a la situación política nacional”. Esto terminó de elaborar uno de los más complejos y fundamentales temas que hay que resolver en cualquier negociación.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos intentó hacer fracasar la gira por América Latina del FMLN presionando por medio de sus embajadas a los presidentes y cancilleres de

lo inamistoso que sería ese gesto para ese país. Ello no tuvo éxito y quedó claro que eran otros tiempos, muy diferentes a los de la época de la Declaración Franco-Mexicana, en donde Estados Unidos, en menos de 48 horas, había alineado a prácticamente todo el continente en contra de esta iniciativa, dejando solo a México.

### **La nueva administración estadounidense y el conflicto en Centroamérica (1989-1992)**

El 15 de septiembre de 1989, en las instalaciones del Seguro Social en San Jerónimo, Distrito Federal, tuvo lugar la primera reunión de diálogo entre la comisión del gobierno de El Salvador del recién electo presidente Alfredo Cristiani, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la comisión nombrada por el FMLN. Este hecho se dio después de haber transitado por cientos de reuniones durante varios años con infinidad de actores políticos, religiosos, sociales, del sector privado y del mismo campo revolucionario salvadoreño. La mayoría de dichas reuniones se realizaron en territorio mexicano.

La victoria electoral del partido Arena y la llegada de Cristiani al gobierno generó en varios dirigentes del FMLN la certeza de que ahora sí llegaba al ejercicio del poder político la oligarquía salvadoreña sin intermediarios y que sería directa la negociación con los que de verdad mandaban al Ejército Nacional. Esta reflexión en parte era cierta, pero a lo largo de los 28 meses y tres días que duró la negociación entre los delegados del gobierno salvadoreño y el FMLN quedó claro que el instrumento militar que usaban para mantener su dominio había cobrado vida propia y el temor a un golpe de Estado estuvo presente en varios momentos del proceso negociador.

El lenguaje en el discurso inicial del presidente Cristiani para proponer “un proceso de diálogo sin condiciones, serio y permanente” se concretó el 7 de agosto de 1989, al término de la reunión de presidentes centroamericanos en el Puerto de Tela, Honduras, con la declaración de que estaba dispuesto a buscar una solución política al conflicto por medio del diálogo.

El FMLN respondió aceptando la oferta de diálogo y, a través de la Iglesia católica salvadoreña, en la figura del arzobispo monseñor Arturo Rivera y Damas, se comenzó a concretar la primera reunión entre las delegaciones nombradas por ambas partes.

Así llegó el 13 de septiembre y México se convirtió en la sede principal de las reuniones de diálogo entre el gobierno de El Salvador y el FMLN, intermediadas en sus inicios por delegados de la Conferencia Episcopal Salvadoreña. En un primer encuentro, el FMLN expuso que era necesario que en la delegación del gobierno se integrara un representante del Ejército salvadoreño, ya que uno de los lineamientos centrales que discutir sería el papel de las fuerzas armadas en una sociedad democrática.

El siguiente encuentro fue pactado para realizarse en San José, Costa Rica, en el convento de las hermanas clarisas. Allí se presentó la delegación oficial con una variante. Estuvieron varios asesores y, entre ellos, algunos militares de alto rango y empresarios destacados, quienes en las reuniones del primer día no acompañaron dentro del salón de reuniones a los miembros de la delegación oficial.

Al otro día, los asesores participaron sentándose en la parte de atrás de su delegación, lo cual era un paso trascendental para el contenido del diálogo entre ambas delegaciones. De ahí en adelante, escucharían a la parte con la que estaban enfrentados.

En el encuentro de Costa Rica, el FMLN tenía que resolver una contradicción fundamental que martirizaba a la delegación presente en la reunión: la necesidad de mantener abierta la mesa de diálogo sin dejar de realizar la planificada ofensiva “hasta el tope”, que durante casi un año se había decidido ejecutar para mejorar la correlación político-militar, considerando que sería la última oportunidad de una acción militar de carácter estratégico, pues Nicaragua había decidido negociar bilateralmente con el gobierno estadounidense un proceso de distensión.

Por la franqueza en los términos de la relación México-FMLN, esta información se transmitió, pero de forma general, sin manejar los pormenores de dicha operación estratégica.

México siempre estuvo enterado y cooperaba por medio de sus embajadas y embajadores para posibilitar todos los encuentros que contribuyeran a construir el escenario de la negociación final. La constante coordinación y solicitud de opinión, asesorías y consultas a algunos gobiernos que influían en ambas partes llevó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas a proponer un grupo de países amigos, conformado por México, España, Colombia, Venezuela, conocido como el Grupo de Países Amigos del Secretario General de la ONU, al que se unió posteriormente Estados Unidos. Vale la pena señalar que para el FMLN la política del gobierno de México siempre fue garantía de neutralidad y respeto a sus puntos de vista y posiciones.

Las dos reuniones de negociación que se realizaron en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, fueron claves para concretar los temas que permitieron el acuerdo final.

Las últimas horas del año de 1991 fueron críticas. Ahí, el embajador mexicano Jorge Montaña fue el más consultado por Joaquín Villalobos para lograr apoyo de su gobierno y poder

incluir en el texto del acuerdo un compromiso del gobierno salvadoreño y de la comunidad internacional para instrumentar programas que permitieran a los insurgentes desmovilizados una reinserción a la vida económica con un mínimo de seguridad material para que no hubiese alzamientos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz.

Este tema, que no había sido abordado, pero que era esencial en la construcción de condiciones para lograr un cese de fuego consistente y duradero, terminó siendo visto como un pretexto que Joaquín Villalobos introducía a última hora para no firmar. Sin embargo, México estaba informado por su embajador de las genuinas preocupaciones del líder insurgente sobre este asunto tan crucial para garantizar la sostenibilidad del cese de fuego.

El embajador Montaña convocó a los otros embajadores del Grupo de Países Amigos para abordar esta temática, atender las preocupaciones expresadas y buscar soluciones en conjunto con el secretario general de las Naciones Unidas.

Como resultado de este esfuerzo, se incluyó al final un párrafo que dio pie a programas que hicieron posible un proceso sostenible de reinserción de ex combatientes, que duró varios años y cuyo costo fue de varios millones de dólares.

Es de reconocer el compromiso del gobierno mexicano de mantener, en todo momento, una postura independiente a las presiones e intereses de Estados Unidos desde el inicio del conflicto salvadoreño a finales de los años setenta, lo cual se manifestó siempre en su consistente política exterior.

Tal como dice Mónica Toussaint, al gobierno mexicano le interesaba eliminar un foco de tensión que pudiera derivar en un conflicto internacional próximo a su frontera sur y garantizar la estabilidad política regional. Asimismo, apunta que “eran necesarios ciertos cambios políticos y sociales que dieran

viabilidad a las economías centroamericanas y México estaba dispuesto, no sólo a aceptarlos, sino incluso a propiciarlos”. En otro párrafo señala que “el gobierno mexicano se planteó entonces la necesidad de moderar a los sectores revolucionarios, con la finalidad de hacer viable el cambio y frenar la intervención de Estados Unidos”.\*

---

\* Mónica Toussaint, “Centroamérica: entre la guerra y la paz. Del Pacto de Corinto a los Acuerdos de Esquipulas”, en *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, núm. 45, septiembre-diciembre de 2007, p. 174, en [http://www.cialc.unam.mx/web\\_latino\\_final/archivo\\_pdf/Lat45-157.pdf](http://www.cialc.unam.mx/web_latino_final/archivo_pdf/Lat45-157.pdf).